



MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Decreto N° 2459

MENDOZA, 22 DE DICIEMBRE DE 2022

Visto el expediente N° EX-2021-05322035- -GDEMZA-DHIDRO#MEIYE (EXPEDIENTES ASOCIADOS EX-2021-05322248- - GDEMZADHIDRO#MEIYE, PRÓRROGA CONCESIÓN EXPLOTACIÓN, ÁREA CHIHUIDO DE LA SALINA EX-2017- 00224563- -GDEMZA-DHIDRO#MEIYE, PRÓRROGA CONCESIÓN EXPLOTACIÓN, ÁREA CHIHUIDO DE LA SALINA SUR), en el cual se tramita la PRORROGA CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN PASO DE LAS BARDAS NORTE, CHIHUIDO DE LA SALINA y CHIHUIDO DE LA SALINA SUR; y

CONSIDERANDO:

Que YPF SA, en su carácter de única titular de las concesiones, Paso de las Bardas Norte; Chihuido de la Salina y Chihuido de la Salina Sur, se ha presentado mediante sus representantes y ha solicitado prórroga de las citadas concesiones, por 10 años a los términos de los arts. 35, 58 bis y 59 y ctes. de la Ley N° 17.319 y modificatorias.

Que analizando el título de la concesión de explotación del área Paso de las Bardas Norte, ésta tuvo su origen en la Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación N°706/97, publicada en el B.O. en fecha: 14/11/1997, que otorgó a YPF SA, una concesión de explotación de hidrocarburos bajo el régimen del Artículo 27 y siguientes de la Ley N° 17.319, y sus normas complementarias y reglamentarias, por el plazo establecido en el Artículo 35 de dicha norma, a partir de su fecha de vigencia. Respecto a la fecha de vigencia, que no fue definida en el acto administrativo, se entiende vigente desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. La Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo de la Nación N° 481/1996, publicada en BO de la Nación el día 08/01/1997, es el título de la concesión de explotación sobre el área Chihuido de la Salina. A la fecha de su vencimiento, el día 09/01/2022, las partes no habían concluido la negociación de los términos de la prórroga de los plazos de la concesión, por lo que se emitieron las resoluciones MEyE N° 26/2022, ACTA-2022-00165195-GDEMZA-MEIYE, N° 990/2022, ACTA-2022-04747403-GDEMZA-MEIYE y N° 1648/22, ACTA-2022-07153981-GDEMZA-MEIYE, que prorrogaron sucesivamente este proceso de negociación de la prórroga hasta el día 09/01/2023. La Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo de la Nación N° 181/1997, otorgó a favor de YPF S.A. una concesión de explotación de hidrocarburos, sobre el área Chihuido de la Salina Sur, publicada en Boletín Oficial el día 24/04/1997 y vigente a partir del día siguiente de esa publicación. La Resolución MEyE N° 576/22, (ACTA-2022-02769595-GDEMZA#MEIYE), prorrogó la concesión hasta el 25/10/2022. Y la Resolución MEyE N° 1739/22, la prorrogó hasta el 25/01/2023.

Que la concesionaria YPF S.A., ha mantenido la titularidad de las concesiones, por lo que en ese carácter de titular se encuentra legitimada para realizar la solicitud de prórroga, y que, además, las presentaciones han cumplimentado los requisitos formales que exige la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003 y el plazo de antelación que exige el Artículo 35 Ley N°17319.

Que respecto a las condiciones de fondo que prevé el citado Artículo 35, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones como concesionarios de explotación y la circunstancia de estar produciendo hidrocarburos, los informes técnicos del Departamento Técnico de la Dirección de



Hidrocarburos, han concluido que las áreas fueron explotadas racionalmente.

Que el Departamento Económico Financiero, ha realizado el análisis de la capacidad económico financiera de YPF S.A. en el Informe, IF-2022-05840877-GDEMZADHIDRO#MEIYE, incorporado en el Orden 24, concluyendo que “cumple con lo requerido por la Disposición S.E.N. 335/2019.” Por ende, acredita la solvencia económico financiera que exige el Artículo 5 de la Ley N°17.319.

Que el concesionario presenta un Plan de Inversiones para cada una de las áreas, que la Autoridad de Aplicación a través de su Departamento Técnico analiza y confirma en los términos que surgen del Anexo II, apartado A, B y C, para cada una de las citadas áreas respectivamente, los cuales se consideran compromisos en firme.

Que YPF S.A. peticiona también para las tres áreas, la eximición del Bono de Prórroga contemplado en el Artículo 58 bis Ley N°17.319 y el mantenimiento de la alícuota de regalías en el 12%, (Artículo 59 de la Ley N° 17.319), petición que ha sido analizada por el Departamento Técnico encontrándola justificada, constatándose el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley Nacional de Hidrocarburos, además, se ha valorado que la propuesta se conforma al interés público provincial.

Que el compromiso en la ejecución de las actividades correspondientes al plan de inversiones propuesto, el monto en capital invertido, su actividad, y su cronograma, se consideran condiciones determinantes y necesarias para la eximición del Bono de Prórroga y el mantenimiento de la alícuota de regalías al 12%.

Que se ha considera conveniente disponer determinadas cláusulas para dar claridad al marco normativo de la prórroga otorgada, considerando que la concesión que se busca prorrogar, se originó en una concesión anterior al dictado de las Leyes 26197, 27007, 7526 e incluso anterior al dictado de la Reforma Constitucional de 1994 y considerando también que la potestad de otorgar las prórrogas que sean solicitadas es de provincia de Mendoza en el ejercicio del poder concedente, atribuido a tenor de Artículo 124 CN y Ley N°26.197, que podrá disponerla cuando constate el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley Nacional de Hidrocarburos y, además, valore en ejercicio de sus potestades discrecionales, que se conforma al interés público otorgarlas.

Que las cláusulas dispuestas en la relación de la petrolera con los superficiarios, en materia ambiental, y abandono de pozos, tienen su fundamento en los Artículos 24, 29, 31, 32 y 33 de nuestra Ley N°7526. Y esa potestad de imponer condiciones, no es arbitraria ni irracional, sino que se atiene al marco legal vigente, es objetiva, y ha aprobado un juicio de razonabilidad y fundamentación que la sustente.

Que resulta necesario imponer una cláusula - y compete a las facultades provinciales, a tenor de lo dispuesto en Artículo 24 Ley N°7526 - a efectos de no afectar la seguridad jurídica del derecho de propiedad superficial, sin dejar de considerar la preminencia de la actividad extractiva sobre la actividad del superficiario a tenor de lo dispuesto en Artículo 13 del Código Minería, por remisión del Artículo 66 Ley N°17.319.

Que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el N° 16, Paz Justicia e Instituciones Sólidas (Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible), compele al Estado, a evitar



conflictos entre la petrolera y el superficiario, que, en la mayoría de los casos, representan relaciones de desigualdades irreconciliables. Además, el texto previsto en los últimos pliegos licitatorios de Mendoza y en el proyecto de pliego licitatorio actualmente en trámite, también contempla la cláusula en análisis.

Que las normas de protección ambiental, deben ser expresas y además la provincia, en el ejercicio de facultades concurrentes, puede exigir altos estándares de protección ambiental, considerando también los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de los Estados miembros de Naciones Unidas, que en el Objetivo 13, Acción por el clima, propone adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; o el Objetivo 9 que manda a construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

Que con relación al Seguro Ambiental, el mismo, está previsto en Artículo 22 Ley Gral. del Ambiente. Se incorporó como exigencia en las prórrogas 2010/2011, y en todos los pliegos licitatorios propuestos en la Provincia de Mendoza. Además, es ejercicio del principio de previsión, contemplado en nuestra Ley Provincial de Hidrocarburos N° 7526.

Que en cuanto a los pozos no abandonados que pudieran significar un activo para la Provincia, por criterios técnicos, resulta conveniente y legal mantener en la concesionaria que lo ha perforado o explotado, la obligación de su abandono, la que tiene su fundamento en principios insoslayables de protección ambiental, y en cuanto la reversión al estado no significará nunca renunciamento al deber de abandono de quien lo ha perforado, obligación que podrá imponerse con posterioridad a la reversión.

Que el principio de quien contamina paga establece que el «contaminador» debe pagar para: prevenir la contaminación o remediar el daño causado. Este principio goza de reconocimiento internacional y se consagra como principio 16 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la siguiente manera: «Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que quien contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.»

Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional incluye tanto el concepto de prevención de la contaminación por parte de las actividades productivas como la «obligación de recomponer» en caso de que se verifique daño ambiental. E impone al Estado, el deber de velar por el derecho a un ambiente sano y para hacer que los contaminadores paguen, a través de su reglamentaciones y regulaciones.

Que se considera conveniente mantener la cláusula que define la mora, situaciones de incumplimiento que se proyectan en cláusulas 12 y 13, para brindar seguridad jurídica a ambas partes contratantes y prever la obligación de otorgar una garantía de fiel cumplimiento, ejecutable en caso de que se constate un incumplimiento que supere el 20% del compromiso de inversión, al que se le dará el destino de una pena o multa, independientemente de que se regularice la situación de incumplimiento, y de que proceda la caducidad de la extensión u otras sanciones, en caso de no subsanarse y de tratarse de un incumplimiento sustancial e injustificado.

Que así entonces, en esos términos, se incorporan a la prórroga que se otorga, como



condiciones necesarias y determinantes de su otorgamiento, cláusulas referidas al marco legal; al canon de explotación, que se proyecta según lo previsto por el Artículo 21; la cláusula de compra mendocino, conforme Artículo 5º, una cláusula vinculada con las tareas de inspección y fiscalización; una cláusula vinculada a las obligaciones con los superficiarios, conforme Artículo 24 de la Ley Provincial N° 7526; la cláusula vinculada a medio ambiente; conforme Ley provincial N° 5961, sus Decretos Reglamentarios N° 437/93 y N° 170/08 y la Resolución de la ex Secretaría de Energía de la Nación N° 25/2004, la obligación de contratar un seguro ambiental, conforme al Artículo 22 de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y resoluciones reglamentarias de la autoridad competente en la materia; una cláusula sobre reversión de área; y sobre abandono de pozos, conforme a la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación N° 5/96 y marco ambiental.

Que se exige también una garantía denominada garantía de fiel cumplimiento, que tiene por objeto garantizar el plan de inversiones comprometido, a fin de asegurar el fiel cumplimiento del plan de inversiones comprometido, el equivalente al 10% del plan de inversiones, ejecutable si la Autoridad de Aplicación constata un incumplimiento que represente un 20% del monto comprometido en el plan de inversiones y debe intimarlo a regularizar su situación de incumplimiento, que el concesionario perderá y se ejecutará en calidad de multa dispuesta por la Autoridad de Aplicación; además de una cláusula que prevea la situación de incumplimientos graves y rescisión, que se ha considerado junto con la eximición del bono de prórroga y la regalía adicional que contempla el Artículo 59 Ley N°17.319.

Que a los efectos de agilizar la percepción de las regalías, con la vigencia del plan gas 2024, o lo que en el futuro lo sustituyan, se considera conveniente, dejar expresa constancia que la concesionaria estará obligada a informar oportunamente a la Provincia de Mendoza, los precios a los que se le adjudiquen determinadas cantidades de producción en cualquier plan de incentivo del Estado Nacional, y abonará regalías sobre las sumas efectivamente percibidas del Estado Nacional, si el Estado no dispone su pago directamente a la Provincia Productora, provengan de precios adjudicados por el Estado Nacional o de cualquier otro estímulo. A tales efectos, deberá informar a la Autoridad de Aplicación, además de los precios efectivamente percibidos, las sumas cobradas como consecuencia de cualquier programa del gobierno nacional, de incentivo o estímulo a la producción, que se considera parte del precio.

Por ello, de conformidad con el Artículo 124 de la Constitución Nacional, Artículos 1º de la Constitución Provincial, la Ley Nacional N° 17.319, N° 26.197 y N° 27.007, Leyes Provinciales N° 7526, N° 9206 y N° 9003 y lo dictaminado por la Asesoría Letrada de la Dirección de Hidrocarburos, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía, Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado,

EL

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1º - Acéptese la solicitud de prórroga de YPF SA, sobre las concesiones de explotación, PASO DE LAS BARDAS NORTE, CHIHUIDO DE LA SALINA y CHIHUIDO DE LA SALINA SUR y en consecuencia prorrogúese el término de las citadas concesiones a tenor de lo dispuesto en art 35 Ley N°17.319, con el objeto de realizar trabajos de explotación y desarrollo de



hidrocarburos bajo el régimen previsto en el presente decreto de prórroga; Ley N° 7526, Leyes N° 17.319; N° 26.197 y N° 27.007, sus normas reglamentarias y complementarias.

Las condiciones establecidas en el presente decreto de prórroga comenzarán a regir a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza y hasta las siguientes fechas:

- Área Paso de las Bardas Norte hasta el 15/11/2032,
- Área Chihuido de la Salina hasta el 09/01/2032,
- Área Chihuido de la Salina Sur hasta el 25/04/2032.

Las coordenadas provisorias de las tres áreas son definidas en Anexo I.

El concesionario deberá dar cumplimiento a todo lo previsto en el presente decreto de prórroga de la concesión y a los términos de su oferta de prórroga.

A aquellos aspectos que no se encuentren especificados en este decreto, les es aplicable en todo lo que resulte compatible con las características y particularidades de la concesión de explotación prorrogada, la siguiente normativa y sus normas modificatorias, las que la sustituyan o complementen:

1. Constitución Nacional.
2. Constitución de la Provincia de Mendoza.
3. Ley Nacional N° 17.319, modificatorias y sus normas reglamentarias y complementarias
4. Ley Nacional N° 26.197 y 27.007
5. Ley Nacional N° 25.675 “Ley General del Ambiente” y sus normas reglamentarias y complementarias.
6. Ley Provincial de Hidrocarburos N° 7.526.
7. Ley de Administración Financiera de la Provincia de Mendoza N° 8706 y sus decretos reglamentarios.
8. Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Mendoza N° 9.003 y el Código Procesal Administrativo Ley N° 3918 o el que lo sustituya.
9. Legislación Ambiental de la Provincia (Ley N° 5961 y sus Decretos Reglamentarios N° 437/93 y N° 2109/94, Decretos N° 170/08 y 248/18 y normas modificatorias y complementarias); Resolución Departamento General de Irrigación N° 249/18 y demás normas sobre aprovechamiento y uso del agua que resulten aplicables a las actividades objeto de la presente Concesión.
10. Leyes de la Provincia de Mendoza N° 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos Del Suelo y



Nº 8999 Plan Provincial De Ordenamiento Territorial.

11. Código Fiscal de la Provincia de Mendoza y Ley Provincial Nº 8521 (de creación de Administración Tributaria Mendoza).

12. Decreto Nº 1864/11.

13. Ley de Ética Pública Nº 8993 y demás disposiciones del Derecho Público Provincial compatibles con las enunciadas precedentemente o de aplicación, en alguno de sus aspectos, con el objeto de la presente Concesión.

14. Ley Provincial Nº 9137.

Los instrumentos que integran la documentación contractual se complementan entre sí de modo que cualquier omisión en alguno de ellos queda salvada por su referencia a otro. En el caso de divergencias interpretativas regirá el siguiente orden de prelación:

1. El presente decreto de prórroga.

2. Propuesta de prórroga incorporada a las actuaciones mencionadas en el Visto del presente decreto.

Artículo 2º - PLAN DE INVERSIONES

El concesionario está obligado a cumplir fielmente el Plan de Inversiones, ofertado y aprobado por la Autoridad de Aplicación, cuyo monto de inversión comprometido para cada una de las áreas prorrogadas, la descripción de sus actividades y su cronograma, se detalla en Anexo II que forma parte del presente decreto.

Se exige al concesionario de abonar a la Provincia de Mendoza el Bono de Prórroga, previsto en Artículo 58 bis Ley Nº 17.319, y la regalía adicional que prevé el Artículo 58 de la misma Ley, para cada una de las concesiones prorrogadas, siempre que el concesionario realice las inversiones comprometidas para cada área, en tiempo y forma.

Artículo 3º - ALÍCUOTA DE REGALÍAS.

El concesionario tendrá a su cargo el pago mensual a la Provincia de Mendoza, de la regalía solicitada: 12%, sobre el producido de los hidrocarburos líquidos y gas natural, extraídos en boca de pozo, alícuota que se considera reducida, a tenor de lo dispuesto en Artículo 59 y determinada conforme arts. 60 y sgtes. de la Ley Nacional Nº 17.319, Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1.671/69 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes.

Del precio del petróleo y gas natural no se reconocerán descuentos por gastos de tratamiento de crudo.

El concesionario estará obligado a informar oportunamente a la Provincia los precios a los que se le adjudiquen determinadas cantidades de producción en cualquier plan de incentivo del Estado Nacional, y abonará regalías sobre las sumas efectivamente percibidas del Estado Nacional, si el Estado no dispone su pago directamente a la Provincia Productora, provengan de precios



adjudicados por el Estado Nacional o de cualquier otro estímulo. A tales efectos, deberá informar a la Autoridad de Aplicación, además de los precios efectivamente percibidos, las sumas cobradas como consecuencia de cualquier programa del gobierno nacional, de incentivo o estímulo a la producción, que se considera parte del precio.

Artículo 4º - CANON DE EXPLOTACIÓN. TASA DE CONTROL LEY N°9137.

El concesionario pagará anualmente y por adelantado por cada Km2 o fracción, el canon de explotación previsto por el Artículo 21 de la Ley N°7526, sus normas reglamentarias y complementarias.

El Concesionario tendrá a su cargo el pago de la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, prevista en la Ley N°9137 y/o la que en el futuro la sustituya o la reemplace.

Artículo 5º - COMPRE MENDOCINO.

El concesionario, en todas las contrataciones que realice en el marco de la prórroga de concesión de explotación, así como sus contratistas y subcontratistas, deberá emplear como mínimo un setenta y cinco por ciento (75 %) de mano de obra mendocina (considerándose mendocinos, a aquellos que acrediten una residencia en la Provincia de Mendoza, mayor a tres (3) años anteriores al momento de realizarse la contratación; y en el mismo porcentaje, las empresas proveedoras y de servicio (considerándose empresa local a aquellas que hayan sido constituidas y/o tengan su domicilio social en la Provincia de Mendoza y tributen en la misma).

El concesionario deberá incorporar en sus planes anuales, programas orientados a incrementar su red de proveedores de bienes, servicios y obras, tendiendo a priorizar la contratación de mano de obra de trabajadores mendocinos, las compras en el mercado local y establecer marcos contractuales de mediano y largo plazo, a efectos de contribuir a la sustentabilidad de la actividad en la Provincia, en condiciones equivalentes de capacidad, responsabilidad, calidad y precio.

No obstante, cuando por la especificidad y/o por las características de las tareas a realizar y/o por condiciones ventajosas de capacidad, responsabilidad, calidad o precio, no resulte posible o conveniente (por ejemplo la no disponibilidad o entrega en los plazos requeridos por la operación, la seguridad para las personas e instalaciones, etc.) la contratación de mano de obra, proveedores y empresas de servicios locales, el concesionario quedará liberado de esta obligación, debiendo acreditar tal circunstancia por ante la Autoridad de Aplicación o el organismo que ésta defina a su requerimiento. En todos los casos, para la contratación o subcontratación de trabajos o servicios necesarios para llevar a cabo la actividad, el concesionario deberá instrumentar procedimientos de selección que garanticen los principios de transparencia, competencia efectiva y eficiencia.

Artículo 6º - INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN.

La Autoridad de Aplicación ejercerá un control amplio. A través del personal a su cargo tendrá derecho de inspeccionar, sin ningún tipo de restricciones, ni necesidad de aviso previo, los campamentos, instalaciones y/o yacimientos de hidrocarburos a los efectos de verificar el cumplimiento del Plan de Inversiones comprometido, y la ejecución de las tareas de explotación, o en su caso de exploración complementaria, a fin de asegurar la observancia de las normas



contractuales, legales y reglamentarias de orden Nacional y Provincial aplicables.

La Autoridad de Aplicación podrá recabar del concesionario toda la documentación o información que estime pertinente para su tarea, las auditorías que considere necesarias, como así también definir la manera en que el concesionario deberá presentar la información solicitada, incluyendo y no limitándose al formato, tipo de software, frecuencia de presentación, medio de entrega, etc.

El concesionario deberá facilitar tanto la información requerida como el acceso a aquellas personas que se designen por la Autoridad de Aplicación para inspeccionar y proveer la ayuda logística necesaria en caso de dificultades técnicas para el acceso al área de la concesión, a dichos fines.

Artículo 7° - OBLIGACIONES CON LOS SUPERFICIARIOS.

El concesionario deberá indemnizar a los propietarios superficiarios por los perjuicios que les causare con sus actividades, en los términos y procedimientos establecidos por el artículo 24 de la Ley Provincial N°7526 y supletoriamente por lo establecido en los Artículos 66 y 100 de la Ley N°17.319.

El concesionario deberá ofrecer pagar al superficiario, como mínimo, el importe que fijan las Resoluciones Conjuntas que dictan la actual Secretaría de Energía de la Nación y la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, o los organismos que los sustituyan, informando al superficiario, previo a la realización de los trabajos, la individualización de todas las instalaciones y superficie afectada por la actividad que se desarrollará en el área de la concesión y ofreciendo de modo previo y anticipado, al desarrollo de su actividad, la suma dineraria en concepto de monto indemnizatorio, acompañada de una discriminación de los distintos conceptos que lo componen.

En caso de constatare conductas que obstaculicen los derechos de superficiarios, la Autoridad de Aplicación podrá sancionar al concesionario, conforme al régimen sancionatorio previsto en Artículo 28, Ley N°7526.

Artículo 8° - PROTECCION MEDIO AMBIENTE.

El concesionario deberá a llevar a cabo su actividad en las áreas en forma segura y eficiente con el cuidado y la debida diligencia que le son exigibles de acuerdo con su idoneidad y experiencia, minimizando la emisión de gases nocivos a la atmósfera y la contaminación aledaña, respetando toda la normativa vigente nacional, provincial y municipal y la que en un futuro pudiera dictarse referente al cuidado y preservación del Medio Ambiente y de acuerdo con las mejores prácticas y reglas del buen arte internacionalmente aceptadas en la industria petrolera, asumiendo todos los riesgos de la actividad comprometida, para preservar las personas y los bienes, la seguridad del yacimiento y el medio ambiente y reducir el impacto sobre el mismo, responsabilizándose por la actuación de sus funcionarios, empleados, consultores, contratistas y/o subcontratistas.

En caso de daños, deberá mantener indemne a la Provincia de Mendoza, contra todo tipo de reclamaciones. En caso de daño ambiental comprobable, se hará cargo de las tareas de saneamiento correspondientes según la legislación vigente.



El aventamiento de gas o venteo deberá ajustarse a la reglamentación nacional vigente y a la que se dicte en jurisdicción provincial. Deberá informarse de igual modo a la Autoridad de Aplicación provincial, debiendo solicitarse autorización, en los casos que lo permite la reglamentación, a la Autoridad de Aplicación provincial.

Dentro de los sesenta (60) días a contar desde fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza del presente decreto, el concesionario deberá presentar ante la Dirección de Hidrocarburos el libre deuda ambiental emitido por la Dirección de Protección ambiental sobre la inexistencia de situaciones ambientales en cada una de las áreas o en su defecto, informar sobre el estado de gestión de las situaciones ambientales existentes en cada una de las áreas, en el marco del informe ambiental 2008 (IA2008) e informes de situación presentados ante la Dirección de Protección Ambiental en relación a cada área (Decreto N° 170/08) las que deberán encontrarse totalmente saneadas en el plazo que autorice la Autoridad de Aplicación Ambiental.

Seguro Ambiental.

El concesionario deberá contratar un seguro ambiental conforme al Artículo 22 de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y resoluciones reglamentarias de la autoridad competente en la materia, con una empresa de primera línea, aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La cobertura deberá garantizar la efectiva remediación del daño causado hasta el monto mínimo asegurable. La Póliza debe cubrir cuatro (4) cuestiones básicas: (i) daños súbitos y accidentales; (ii) daños graduales; (iii) predios de terceros; (iv) predios propios del asegurado.

Artículo 9° - REVERSION DE AREA.

La reversión total o parcial de las áreas se realizará conforme disponen los Artículos 85, 37 y 41 de la Ley N°17.319. En caso de reversión parcial o total del área concesionada deberá presentarse ante la Autoridad de Aplicación Ambiental una Auditoría que certifique la no existencia de pasivos ambientales en el área a revertir. Dicha Auditoría deberá presentarse con una antelación a los tres (3) meses anteriores a la fecha prevista para la devolución del área.

Artículo 10° - ABANDONO DE POZOS.

El concesionario deberá cumplir con el cronograma de abandono de pozos propuesto, que se considera obligación en firme y con la campaña de estudio de los pozos inactivos durante los años 2023/2025, para definir su abandono a los términos de la Res SE N° 5/96 como parte del plan de abandono de pozos propuesto, según cronograma que se grafica en Anexo II del presente decreto.

El concesionario, deberá presentar anualmente a la Autoridad de Aplicación, el plan de abandono de pozos, a los términos de la Resolución SE N° 5/96, y aplicando en las tareas de abandono los estándares más modernos de la industria, realizando los trabajos de modo seguro y eficiente. Y deberá informar, con una antelación de un mes, la fecha de inicio de las tareas de abandono, para su oportuno control por la Autoridad de Aplicación. A la finalización de las tareas de abandono deberá presentar informe final correspondiente.

Todos los pozos perforados en el área de la concesión, previo a la reversión del área, deberán encontrarse en estado de abandono definitivo, conforme a la reglamentación vigente.



El tratamiento que dará la Autoridad de Aplicación es el previsto en la Resolución de la entonces Secretaría de Energía de la Nación N° 5/96 o la que en el futuro la reemplace o la que se dicte a nivel provincial.

La reversión al estado no significará nunca renunciamiento al deber de abandono de quien lo ha perforado.

El plan de saneamiento de pasivos ambientales, es independiente de la obligación de abandono de los pozos.

Artículo 11° - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

El concesionario deberá constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento a los diez (10) días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Prórroga, por cada área objeto de prórroga.

La garantía deberá contener:

Beneficiario: Provincia De Mendoza

Domicilio Beneficario: Peltier 351, Sexto piso, Cuerpo Central, Casa de Gobierno, Ciudad Mendoza.

El domicilio especial de las partes, deberá estar situado en la Ciudad de Mendoza.

Objeto: Plan de Inversiones: Plan de trabajo, que describe las actividades de desarrollo comprometidas, su cronograma de trabajos; el monto de inversión expresado en dólares estadounidenses, que ha sido considerado conveniente por la Dirección de Hidrocarburos para aceptar la prórroga de la concesión.

Monto A Asegurar: equivalente al 10% del Plan De Inversiones, el que se mantendrá constante, independientemente del avance del Plan De Inversiones, hasta su total culminación.

El concesionario perderá la Garantía de Fiel Cumplimiento si la Autoridad de Aplicación constata un incumplimiento que represente un 20% del monto comprometido en el Plan de Inversiones y debe intimarlo a regularizar su situación de incumplimiento.

La Provincia de Mendoza ejecutará en ese caso la Garantía de Fiel Cumplimiento sin necesidad de interpelación administrativa o judicial previa alguna y sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento alguno por parte del concesionario. En caso de ejecución judicial, la única excepción admisible para el demandado será el pago de ésta.

Artículo 12° - MORA E INCUMPLIMIENTO.

La mora operará de manera automática y de pleno derecho, salvo en aquellos casos en que la obligación no tenga una fecha de vencimiento determinada, en cuyo caso para constituir en mora a EL CONCESIONARIO, la Autoridad de Aplicación deberá interpellarla previamente, en forma fehaciente, al domicilio constituido, dentro de los plazos que correspondan de acuerdo a la naturaleza de la obligación en cuestión.



El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de la concesión que no configuren causal de caducidad o sea reprimido de manera distinta, podrá ser penado por la Autoridad de Aplicación de conformidad a la Ley Provincial N°7526 - Artículo 28 , su reglamentación y las actualizaciones de los valores de las multas que disponga su reglamentación.

Artículo 13°.- INCUMPLIMIENTOS GRAVES Y RESCISIÓN.

Serán causales de caducidad de la prórroga de la concesión otorgada, además de las contempladas en el Artículo 80 de la Ley N° 17.319, las siguientes:

1. Incumplimiento en el Pago de la Regalía comprometida;
2. El Incumplimiento del Plan de Inversiones;

En caso de que la Autoridad de Aplicación constate el incumplimiento total o parcial del Plan de Inversiones, intimará al concesionario a subsanarlo en un plazo perentorio y razonable, bajo apercibimiento de imponerle el pago del Bono de prórroga que se la ha eximido, aplicar las regalías que autoriza el Artículo 59 (hasta el 15%) y/o dictar la caducidad de la extensión de la concesión, sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que se perderá y ejecutará en calidad de multa dispuesta por la Autoridad de Aplicación.

La situación de incumplimiento al Plan de Inversiones, se considera una falta grave, que hará pasible a la incumplidora, de la sanción de multa hasta por el máximo previsto en la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio que la incumplidora regularice su situación o finalmente se declare la caducidad de la extensión.

Transcurrido el plazo otorgado sin que el incumplimiento haya sido subsanado, el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá, previo informe de la Autoridad de Aplicación, la caducidad de la extensión, sin derecho a reclamo o indemnización alguna, respecto a los efectos ya cumplidos del presente.

Artículo 14° - JURISDICCIÓN

En caso de controversia, sobre la aplicación de todos los derechos y obligaciones que derivan del presente decreto y su marco legal, resultan competentes los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, con renuncia a todo otro fuero judicial que pudiera corresponder, inclusive el Federal; con excepción de aquellas cuestiones que resulten de competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación.

Artículo 15° - Por intermedio de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía y Energía, notifíquese la presente norma legal a los concesionarios, a la Dirección de Protección Ambiental y a la Dirección General de Regalías.

Artículo 16° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ

LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ



NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: [Anexo](#)
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar

Publicaciones: 1

Fecha de Publicación	Nro Boletín
31/03/2023	31836